

Las propuestas liberalizadoras de Valls dividen a los diputados del PS francés

RAQUEL VILLAÉCJJA

La nueva ley de François Hollande para «desatascar» la economía del país y crear empleo ha acentuado aún más la división dentro del Partido Socialista galo y podría incluso no contar con la mayoría parlamentaria suficiente para salir adelante, pues muchos diputados del partido que gobierna han advertido que podrían votar en contra. **SIGUE EN PÁGINA 23**



El primer ministro francés, Manuel Valls, junto al titular de Economía, Emmanuel Macron, ayer, en París. EFE

La reforma de Valls divide a la izquierda gala

La Asamblea Nacional podría tumbar con el apoyo de diputados del Gobierno el último paquete de medidas liberalizadoras de Hollande

VIENE DE PRIMERA PÁGINA

La Ley para el Crecimiento y la Actividad aprobada ayer por el Consejo de Ministros cuenta, nada más nacer, con la oposición del ala izquierda del PS y de los sectores afectados, que se manifestaron ayer para expresar su descontento.

La bautizada como *Ley Macron*, presentada por el ministro del ramo, Emmanuel Macron, lleva la impronta de Manuel Valls y François Hollande y pretende «liberar la economía de los cerrojos» que impiden la creación de empleo.

Arropado por el primer ministro,

Manuel Valls, y otros siete miembros del Ejecutivo, Macron, en el Gobierno desde agosto, defendió un paquete que permitirá «liberar el potencial inexplorado de actividad» en el país. La norma, calificada de «liberal e inaceptable» por gran parte de la izquierda, incluye medidas polémicas como la ampliación de la apertura del comercio los domingos y la reforma del acceso a las profesiones reguladas en el sector jurídico.

Para el Gobierno se trata de «liberar la economía» de trabas, simplificar la burocracia para permitir la creación de nuevas empresas y

más empleo, pero los sectores afectados opinan que empeora sus condiciones laborales. Abogados y notarios protestaban por la tarde en las calles de París mientras que algunos dirigentes socialistas, como Martine Aubry, criticaban duramente el paquete.

El punto más controvertido, rechazado por los sindicatos y el ala izquierda del socialismo, es el que amplía la apertura de los comercios en domingo de los cinco actuales a doce. Se crearán además zonas turísticas internacionales donde las tiendas podrán abrir los siete días de la semana.

A cambio, se compensará a los asalariados, algo que no era obligatorio hasta ahora.

Según declara a EL MUNDO el economista Philippe Légié, «el impacto en la actividad y en el consumo será mínimo». También contestaron la medida la alcaldesa de París, la socialista Anne Hidalgo, y sobre todo Martine Aubry, que publicó una dura tribuna en *Le Monde* en la que denunciaba un «paso atrás» en los derechos de los trabajadores.

Otro punto espinoso es el que afecta a los abogados, notarios y profesionales del sector judicial. El Gobierno quiere «abrir a la competencia» a este ámbito protegido para permitir, por ejemplo, que un notario recién licenciado pueda empezar a trabajar sin las trabas burocráticas que hoy se encuentra. Además, se revisarán las tarifas que estos profesionales piden por sus servicios para beneficiar a los usuarios, algo a lo que se opone el sector, que critica que disminuirán sus ingresos. «Se trata de controlar mejor las situaciones de monopolio y abrir la competencia», defendió Macron.

EN BUSCA DE APOYOS

El Gobierno tendrá que pelear más que nunca sus apoyos en el Parlamento. La Ley llegará a la Asamblea en enero aunque podría no obtener la mayoría suficiente para salir adelante. Muchos diputados socialistas que se abstuvieron en la votación de los Presupuestos de 2015 o en la Ley de Financiación de la Seguridad Social ya han mostrado su oposición a la norma y podrían votar en contra por primera vez.

Si lo hicieran también ecologistas y comunistas, el proyecto no contaría con el respaldo suficiente y Hollande perdería su mayoría. «Hoy la ley no tiene los apoyos suficientes. Es el riesgo del texto. Hay que aligerarlo, eliminar las minas porque, de lo contrario, puede haber un accidente», señalaba un colaborador del presidente a *Le Monde*.

Este es el segundo gran proyecto del presidente para reformar el país, junto con el Pacto de Solidaridad. El Gobierno confía en que el paquete impulse el crecimiento y reduzca la tasa de paro (superior al 10%) antes de que acabe el mandato de Hollande, que ya dijo que no repetirá como candidato si no logra reducir el desempleo.

El texto también contempla la cesión de participaciones estatales por valor de entre 5.000 y 10.000 millones de euros para reducir la deuda pública (95% del PIB) y más facilidades a las empresas de autocares para que puedan abrir nuevas rutas nacionales sin los complejos procesos de autorización actuales.

Manuel Valls aseguró que el proyecto muestra que el Gobierno quiere hacer más reformas, tal y como exigen Bruselas y Alemania, y que sus efectos empezarán a verse «a partir del verano».